



Nueva Ley de Aguas: el agua como botín político del régimen

Morena aprobó su nueva Ley de Aguas y con ello convirtió en norma lo que durante años ha sido una práctica de gobierno: centralizar, improvisar y trasladar los costos de su incompetencia a la gente. Aunque el discurso oficial presume que ahora sí se garantizará agua para todos, el texto aprobado cuenta una historia muy distinta.

La nueva ley concentra el control del agua en la Federación, reduce la autonomía de estados y municipios, elimina derechos adquiridos y pretende decidir desde la CDMX cómo debe operar cada pozo, cada sistema municipal y hasta qué infraestructura debe instalar cada vivienda. Todo esto sin presupuesto adicional, sin fortalecimiento institucional y sin inversión real para mejorar el servicio.

La crisis hídrica en México es real y profunda. El 76% del agua disponible se utiliza en la producción de alimentos, pero más del 50% de las plantas de tratamiento están inoperantes. La red de distribución pierde más del 40% del agua por fugas y la Conagua arrastra miles de trámites rezagados, con oficinas debilitadas por recortes presupuestales y falta de personal. Nada de esto se corrige con la ley que Morena aprobó.

El problema se agrava cuando se observa el contexto del campo mexicano. Desde 2018, el Gobierno Federal eliminó más de 18 programas estratégicos para la producción agrícola y ganadera. El presupuesto del sector primario se redujo en más del 30% y se desapareció Financiera Rural, dejando sin crédito a miles de pequeños y medianos productores. Sin financiamiento no hay semillas, fertilizantes, maquinaria ni

infraestructura y sin infraestructura no hay agua eficiente ni producción sostenible.

A este abandono se suma el incumplimiento sistemático de los precios de garantía prometidos, la falta de asistencia técnica, el aumento de los costos de insumos y las sequías regionales.

Como si esto no fuera suficiente, el campo enfrenta una inseguridad desbordada. Extorsiones, cobro de piso, bloqueos de caminos y asesinatos como el de Bernardo Bravo forman parte de una realidad que el gobierno prefiere ignorar. En lugar de escuchar a los productores, Morena ha optado por politizar la inconformidad, perseguir líderes.

La nueva Ley de Aguas llega en el peor momento posible. En Acción Nacional la postura fue clara desde la Cámara de Diputados. El agua es un derecho humano y un insumo estratégico, no un instrumento de control político. Defender el acceso equitativo no implica destruir la certeza jurídica ni centralizar decisiones que deben tomarse con conoci-

miento local y técnico. La solución está en invertir en infraestructura, tecnificar el riego, rehabilitar redes, fortalecer organismos operadores y combatir la corrupción, no en imponer una ley sin sustento presupuestal.

Hoy Morena presume una ley aprobada. Lo que no dice es que aprobó también el abandono al campo, la improvisación institucional y una política hídrica que administra la escasez en lugar de resolverla. En Acción Nacional se seguirá defendiendo una política de agua que cuide a las personas, al campo y al país, porque sin agua no hay producción, sin producción no hay alimentos y sin alimentos no hay futuro.

Hoy Morena presume una ley aprobada. Lo que no dice es que aprobó también el abandono al campo